

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



Medellín, catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Demandantes: Alba Luz Correa Correa quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor Juan Manuel Corral Correa y Francy Milena Corral Correa.

Demandada: Colpensiones

Radicado: 05 001 31 05 013 2016 00121 01

AUTO

Para representar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se le reconoce personería a la doctora Manuela Andrea López Henao identificada con cédula de ciudadanía 1.128.441.076 y tarjeta profesional 253.225 del Consejo Superior de la Judicatura, en virtud de la sustitución de poder que le confiere el doctor Andrés Eduardo Salcedo Camacho.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001 31 05 013 2016 00121 00 promovido por la señora **ALBA LUZ CORREA CORREA** quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor **JUAN MANUEL CORRAL CORREA** y por **FRANCY MILENA CORRAL CORREA** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –**

COLPENSIONES, con la finalidad de revisar en consulta la providencia emitida el 26 de enero de 2017 por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de emergencia, económica, social y ecológica”, se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **053**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

La señora Alba Luz Correa Correa quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor Juan Manuel Corral Correa y Francy Milena Corral Correa, demandaron a Colpensiones pretendiendo el reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su cónyuge y padre Miguel Ángel Corral Holguín a partir del 29 de agosto de 2002, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, indexación y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones se expuso, que la señora Alba Luz Correa Correa contrajo matrimonio con el señor Miguel Ángel Corral Holguín el 19 de junio de 1993. De dicha unión procrearon a Francy Milena y Juan Manuel Corral Correa nacidos el 15 de agosto de 1994 y el 23 de octubre del 2000, respectivamente. El señor Miguel Ángel Corral Holguín falleció el 29 de agosto de 2002. El 20 de septiembre de 2002 solicitaron ante el ISS el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, misma que les fue negada mediante la resolución 007587 de 2006 por no acreditar el asegurado 26 semanas de cotización en el último año anterior al fallecimiento, y se procedió con el reconocimiento de la indemnización sustitutiva. El causante cotizó al ISS un total de 314 semanas tal y como se desprende de la resolución 007587 de 2006. El 13

de febrero de 2015 reclamaron nuevamente la prestación al amparo de la condición más beneficiosa y la entidad por medio de la Resolución GNR 379446 de 26 de noviembre de 2015 la negó aduciendo que el causante no cuenta con 300 semanas cotizadas, pues solo se contabilizan 248 semanas.

En sentencia proferida el 26 de enero de 2017, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín absolvió a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones de las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a las accionantes.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada de Colpensiones presentó dentro del término legal escrito de alegatos de conclusión solicitando se confirme la providencia de primera instancia.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico, de esta segunda instancia, consiste en determinar si se cumplen la condiciones legales para el reconocimiento y pago, a favor de las demandantes, y del joven Juan Manuel Corral Correa, les asiste derecho de la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su cónyuge y padre Miguel Ángel Corral Holguín, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, en el tránsito legislativo entre el Decreto 758 de 1990 y la Ley 100 de 1993, retroactivo pensional, intereses moratorios e indexación.

CONSIDERACIONES

Examinada en conjunto la prueba documental que reposa de folios 15 a 57, 73 a 76, 91 a 95, 99 a 102 y 107 a 110 del expediente. La Sala encuentra:

i) Que los señores Alba Luz Correa Correa y Miguel Ángel Corral Holguín contrajeron matrimonio católico el 19 de junio de 1993.

ii) Que de dicha unión procrearon a Francy Milena y Juan Manuel Corral Correa nacidos en su orden: el 15 de agosto de 1994 y el 23 de octubre del 2000.

iii) Que el señor Miguel Ángel Corral Holguín falleció el 29 de agosto de 2002.

iv) Que la señora Alba Luz Correa Correa en nombre propio y en representación de sus hijos menores Francy Milena y Juan Manuel Corral Correa le reclamaron administrativamente al ISS, hoy Colpensiones, el 20 de septiembre de 2002, la pensión de sobrevivientes y la entidad por medio de la resolución 007587 de 2006, se las negó con el argumento de que “...*el asegurado al momento de su fallecimiento no estaba cotizando al sistema, y acredita aportes durante **314** semanas de las cuales 7 fueron cotizados en su último año de vida, cuando el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 exige un mínimo de 26 semanas dentro del mismo lapso para el derecho a la pensión, razón por la cual se concluye que no es viable concederla...*”. Y se concedió la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes en cuantía de \$1.434.190.00 para la señora Alba Luz Correa Correa y en cuantía de \$717.095.00 para cada uno de los menores Francy Milena y Juan Manuel Corral Correa.

v) Que el 13 de febrero de 2013 los demandantes reclamaron nuevamente la prestación económica a la luz del principio de la condición más beneficiosa, misma que les fue negada por medio de las resoluciones GNR 379446 de 26 de noviembre de 2015, GNR 37948 de 4 de febrero de 2016 y VPB 14878 de 2 de abril de 2016, aduciendo que el causante no acreditaba 300 semanas con anterioridad al 1º de abril de 1994.

vi) Que en los actos administrativos referidos se reconoce la siguiente densidad de semanas cotizadas por el señor Miguel Ángel Corral Holguín al sistema general de pensiones:

- Resolución 007587 de 2006: **314** semanas
- Resolución GNR 379446 de 26 de noviembre de 2015: **248** semanas, de las cuales **160.4** se contabilizan al 1º de abril de 1994.
- Resolución GNR 37948 de 4 de febrero de 2016: **248** semanas, de las cuales **160.4** se contabilizan al 1º de abril de 1994

- Resolución VPB 14878 de 2 de abril de 2016: **233** semanas, de las cuales **158** se contabilizan al 1° de abril de 1994.

vii) Que el señor Miguel Ángel Corral Holguín conforme la historia laboral actualizada a 22 de noviembre de 2016, se afilió al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, el 2 de junio de 1982 y cotizó en dicha entidad desde esta fecha hasta el 9 de agosto de 2002, un total de **254.30** semanas, de las cuales **160.43** se efectuaron con anterioridad al 1° de abril de 1994.

DEL DERECHO PENSIONAL

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han reconocido que por regla general y salvo ciertas excepciones, el régimen jurídico aplicable para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes es el vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, considerando que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no consagró un régimen de transición en relación con la misma.

El documento que reposa a folios 44 del expediente informa que el señor Miguel Ángel Corral Holguín falleció el 29 de agosto de 2002. Por ende, las normas aplicables al caso concreto son las contenidas en el texto original del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 que en materia de pensiones comenzó a regir a partir de 1° de abril de 1994.

Conforme al artículo 46, los miembros del grupo familiar del afiliado fallecido tienen derecho a la pensión de sobrevivientes cuando éste habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiese cotizado por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento de su fallecimiento.

Y según el artículo 47, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, siempre y cuando acredite que estuvo haciendo vida marital con el fallecido hasta la fecha de su muerte y convivió con él no menos de dos años continuos con

anterioridad a su deceso, salvo que haya procreado uno o más hijos con el causante. Y los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez.

Sin embargo, en este evento no se colma el presupuesto de la densidad de semanas aludido, porque la resolución 007587 de 2006 y la historia laboral que reposan a folios 15, 16 y 107 a 110 del expediente informan que el asegurado Miguel Ángel Corral Holguín, cotizó al sistema de pensiones, entre el 2 de junio de 1982 y el 9 de agosto de 2002, un total de 314 semanas, de las cuales 7 semanas corresponden al último año anterior a su fallecimiento.

Advierte la Sala que se tiene en cuenta la densidad de semanas referida por ser la más favorable en este asunto y con base en la cual se reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes a los demandantes a través de la resolución 007587 de 2006.

Por su parte, la Corte Constitucional ha adoctrinado que el principio de favorabilidad consagrado en los artículos 53 Superior y 21 del Código Sustantivo del trabajo, “obedece a uno de los dispositivos que la Carta Política establece para la resolución de conflictos surgidos con ocasión de la interpretación o aplicación de las normas que regulan relaciones del trabajo”; y opera, no sólo cuando se presenta un conflicto entre normas sino también cuando existe una norma que admite varias interpretaciones (Sentencias T-792 de 2010 y T-350 de 2012 y T-084 de 2017).

La Alta Corporación mencionada ha señalado en diversas oportunidades que cuando se analiza sobre la procedencia de la pensión de sobrevivientes se puede examinar el reconocimiento de esta prestación a la luz de una norma jurídica anterior a la vigente en el momento de causarse el derecho, aplicando el principio de la condición más beneficiosa como una expresión del principio de favorabilidad, y que para tal reconocimiento es necesario demostrar que el afiliado cumplió el número de cotizaciones exigidas por dicha norma jurídica, y

que los aportes se efectuaron durante su vigencia (Sentencia SU 442 de 18 de agosto de 2016).

El alto Tribunal ha justificado así la aplicación del principio de favorabilidad:

“En efecto, la Corte Constitucional determinó... que en virtud de la inexistencia de un régimen de transición y de los principios de buena fe, confianza legítima y favorabilidad, es posible dar aplicación a una norma anterior... si el afiliado realizó sus cotizaciones en vigencia de la mencionada norma jurídica, cuando una norma posterior resulte desfavorable a su derecho a acceder a la pensión.

Para la Corte Constitucional resulta claro que esta regla tiene como finalidad proteger el principio de favorabilidad que en materia laboral ha reconocido el constituyente primario en el artículo 53 de la Constitución Política. A su vez, el mismo garantiza la protección de la expectativa legítima de aquellos ciudadanos que, observando el régimen pensional vigente para la fecha de su afiliación al sistema de seguridad social, efectuaron sus cotizaciones con el objetivo de obtener su pensión, o el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a sus familiares. Así mismo, es de importancia resaltar que el acceso a la pensión de sobreviviente resulta necesario para la protección del derecho fundamental al mínimo vital, especialmente en aquellos casos en que se evidencia una dependencia económica del cónyuge o compañero permanente supérstite, con el afiliado fallecido. De esta manera, la aplicación del principio de favorabilidad en materia pensional, y en especial, de la condición más beneficiosa, se encuentra directamente ligado a la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos y a la garantía de una vida en condiciones dignas.” (Sentencia T-464 de 2016).

En relación con el alcance del principio de la condición más beneficiosa, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional coinciden en varios aspectos, concretamente: i) Opera ante la existencia de un tránsito legislativo que implica la exigencia de unos requisitos más gravosos para el afiliado, es decir, dando así prevalencia a otros principios y necesidades sobre el principio de progresividad; ii) Protege a una población que tiene una expectativa legítima, pues se encuentra en una situación jurídica concreta, consistente en la satisfacción de las semanas mínimas que exige la norma derogada para acceder a la prestación que cubre la contingencia

respectiva; iii) Para la protección de esas expectativas legítimas no se ha consagrado un régimen de transición.

Así, desde las sentencias con Radicados 22.732 del 18 de febrero de 2005 y 24.280 del 5 de julio de 2005, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en su función unificadora de la jurisprudencia nacional ha considerado de manera reiterada, que aún en aquellos casos en los que la muerte se hubiere presentado en vigencia de la Ley 100 de 1993, si el causante a 1º de abril de 1994 había cotizado 300 semanas, densidad establecida en los artículos 6 y 25 del Decreto 758 de 1990 y no se cumplen los requisitos del artículo 46 de Ley 100 de 1993, los beneficiarios tienen derecho a que se les reconozca la pensión de sobrevivientes con base en aquel, atendiendo a que en el inciso final del artículo 53 de la Constitución Política, que se aplica en materia de seguridad social por expreso mandato del artículo 272 de la Ley 100, se ha consagrado el principio del derecho laboral de la condición más beneficiosa.

Incluso, en la sentencia SL 5147 de 21 de octubre de 2020, Radicación 73.581 se modificó la línea jurisprudencial, a fin de permitir la acumulación de los tiempos públicos servidos sin cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales con los aportes sufragados a esa entidad, con la finalidad de acreditar las exigencias de aportes previstas en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, tanto para la pensión de sobrevivientes como la de invalidez, cuando se invoque su aplicación en virtud del principio constitucional de la condición más beneficiosa. Se indicó en la referida providencia:

“...En dichos términos, la Sala modifica el criterio sobre la posibilidad de computar tiempos de servicios públicos sin cotizaciones al ISS con los aportes a esa entidad en materia de pensiones de invalidez y sobrevivientes, cuando se aplica el Acuerdo 049 de 1990 en virtud del principio de condición más beneficiosa.

En el sub lite, al analizar la controversia bajo los parámetros reseñados, se establece que el asegurado fallecido se afilió al ISS antes de la vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993 y sufragó en ese lapso temporal varias cotizaciones. Además, murió el 2 de mayo de 1998 en vigencia del artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, y esto permite aplicar el principio de condición más beneficiosa a efecto que sus beneficiarios

puedan reclamar la pensión de sobrevivientes con base en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, que exigía para la prestación periódica por muerte 300 semanas de aportes en toda la vida laboral o 150 en los 6 años anteriores a la muerte...”.

Tal pronunciamiento fue citado en la sentencia SL 129 de 27 de enero de 2021, Radicación 77.201, indicándose:

“...Y en reciente pronunciamiento CSJ SL5147-2020 la Sala reiteró la anterior postura, al mencionar que en relación con las prestaciones contempladas en la normativa anterior a la vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, esto es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el artículo 1 del Decreto 758 de ese año, es procedente la aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa, toda vez que aquellas deben considerarse integradas al esquema general de pensiones concebido por la Ley 100 de 1993...”.

Los artículos 6 y 25 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, disponen que habrá derecho a la pensión de sobrevivientes cuando el asegurado hubiese cotizado 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha del fallecimiento, o 300 semanas en cualquier época con anterioridad a aquella. Exigencia que tampoco se cumple en este asunto, porque a la fecha de su deceso el señor Miguel Ángel Corral Holguín había sufragado entre el 2 de junio de 1982 y el 1° de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia en el sector privado el régimen general de pensiones creado por la Ley 100 de 1993, un total de **160.43** semanas, de las cuales **4.14** semanas se aportaron en los últimos 6 años, esto es, entre el 1° de abril de 1988 y la misma fecha de 1994, de ahí que no se cumpla con la densidad de semanas requeridas para acceder a la pensión de sobrevivientes en los términos del acuerdo referido.

En consecuencia, al no acreditarse la procedencia de la aplicación del principio de condición más beneficiosa en la forma solicitada en la demanda, se confirmará la sentencia que se revisa en consulta, por las razones expuestas.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

PRIMERO: Confirmar la decisión que se revisa en consulta por las razones expuestas.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 62 de Abril 15 de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ
MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE
LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE
LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

FRANCISCO ARANGO TORRES
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE
LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

bfbf32d35cf204c90bd30daeff11159046fc0c753e7ca1ba4693500435165ea